

en la causa que por homicidio les instruye.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 22 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por los CC. Diputados Macario Hidalgo y Florencio Santa María, contra un decreto de la legislatura de Querétaro de 24 de Febrero de este año que exonera á los quejosos del cargo de diputados por la renuncia que se supone hicieron de ese cargo por haber sido electores en la eleccion de presidente y tercero y octavo Magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que los CC. Macario Hidalgo y Florencio Santa María solicitan el amparo de la Justicia Federal contra el decreto núm. 187 de la legislatura, que los exonera del cargo de diputados al Congreso del Estado, en virtud de una supuesta renuncia que, se dice, han hecho conforme al art. 134 de la Constitución del Estado, que á la letra es: "Ningun individuo puede desempeñar á la vez dos ó mas encargos de

eleccion popular; pero el nombrado puede elegir el que quiere desempeñar, entendiéndose renunciados los demas. Jamas podrán reunirse en un mismo ciudadano dos empleos ó destinos por los que se disfrute sueldo, exceptuando el ramo de instruccion pública."

El cargo que los quejosos han desempeñado se reduce á la funcion electoral para Presidente y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia; y siendo esa funcion el desempeño de una obligacion federal transitoria, es indudable que no está comprendida en el artículo copiado.

Como la privacion de un cargo de eleccion popular importa una pena, cuya imposicion toca á la autoridad judicial, en el caso se han violado los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución federal.

Los artículos 101 y 102 de la misma cometen á los tribunales de la Federacion el cuidado de velar por la conservacion de las garantías individuales, y es flagrante esa violacion.

No se necesita mucho esfuerzo para comprender que la legislatura ignora ó finge ignorar el espíritu del art. 134 de la Constitución del Estado. Los cargos de eleccion popular de que allí se habla son empleos ó oficios cuyo desempeño continuo y simultáneo impida el buen servicio público. No se trata ni podría tratarse de comisiones accidentales y pasajeras que no son incompatibles con otras funciones permanentes. Fácil es tambien advertir que aun suponiendo exacta la interpretacion que los diputados han dado á dicho artículo, este solo podia aplicarse á funciones del Estado y no á las de la federacion. Cualquiera, en fin, nota á primera vista que ese artículo constitucional no importa el desafuero de los representantes del pueblo en el cuerpo legislativo, ni la trasgresion de los principios tutelares de todo enjuiciamiento.

Pero preescindiendo de estas reflexiones, que es necesario repetir, porque señalan el tamaño de la arbitrariedad ejecutada por la legislatura, el amparo procede de un modo claro y directo. Ante todas cosas, conviene hacer presente, que el citado art. 134 de la Constitución del Estado no es mas que una trascripción del 118 de la carta fundamental de la República. Esto no obstante, diputados al Congreso de la Union, cuyos nombres sería fácil recordar, han sido electores al mismo tiempo que los exonerados, y para el propio objeto; sin que á nadie le haya ocurrido que por esto hubieran renunciado sus cargos ó quedado inhábiles para ejercerlos conforme al precitado art. 118. Siendo idéntico el principio, idénticas debieran ser las consecuencias. Apesar de esto, ni una voz se ha levantado, ni en la Cámara, ni en la prensa, ni en ninguna otra parte, para reclamar el cumplimiento del art. 118, en el sentido que la legislatura lo ha dado al 134.

De las razones de simple analogía pasemos á otras mas prácticas y decisivas. ¿Por qué la legislatura exonera á los CC. Hidalgo y Santa María de sus cargos respectivos de diputados, sin haberlos renunciado espresamente? Porque, segun ella, desempeñaban otro de elección popular con violación de la ley. Esto quiere decir que ha considerado quebrantada una disposición prohibitiva, ó en otros términos, que ha creído que Hidalgo y Santa María han infringido la ley. Por lo que al obrar así, la legislatura se convirtió en tribunal, á cuya jurisdicción estarían ó no sujetos los quejosos por razon de su propio cargo. Y en el primer miembro de esta disyuntiva ¿se acordó siquiera la legislatura del art. 20 de la Constitución Federal? ¿No lo ha infringido en todas y cada una de sus cinco fracciones? Y en el segundo caso de la misma disyuntiva ¿tuvo presente el art. 21? Así es que ha violado

una de las mas preciosas garantías, no ya del ciudadano, sino del hombre.

Como anteriormente se ha dicho, el art. 35 de la misma Constitución Federal, en su fracción 2ª, concede á todo ciudadano la prerrogativa de "poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo ó comision, teniendo las calidades que la ley establezca." Los quejosos fueron electores conforme á la ley federal y usaron de un derecho, á la vez que cumplieron con una obligación impuesta por aquella. Esa prerrogativa comprende una garantía constitucional del ciudadano mexicano, que ha sido violada.

Que se ha impuesto una pena á los quejosos, nos lo indica la fracción 14 del art 92 del Código penal: lo dice la fracción 12 del art. 93; y queda confirmado por la misma escepcion de la regla, que se encuentra especificada en el art. 60, en los siguientes términos: "No se estimarán como penas: la restricción de la libertad de una persona, ya sea por arraigo, ó por detención ó prision formal; su incomunicación; la separación de los empleados públicos de sus cargos, ni la suspensión en el ejercicio de ellos, *decretados por los tribunales, ó por las autoridades gubernativas; cuando esto se haga para instruir un proceso.*" Como en el caso, la destitucion ha tenido el carácter de definitiva, y no de provisional, es verdaderamente una pena.

Por lo espuesto, el Promotor fiscal pide: se sirva vd. declarar que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Macario Hidalgo y Florencio Santa María, contra el decreto 187 de la legislatura, que los destituye del cargo de diputados con motivo de haber sido electores para nombrar presidente y magistrados 3º y 8º de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

Querétaro, 5 de Marzo de 1873.—
Luis Castañeda.

SEGUNDO PEDIMENTO.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, dice: que habiendo sido despedidos de la legislatura del Estado, por siete de sus propios compañeros, los CC. Macario Hidalgo y Florencio Santa María, solicitan del poder judicial de la Federación ser amparados contra ese procedimiento arbitrario (fojas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de este expediente). El acto reclamado afecta la forma de decreto, y es como sigue: "Número 187.—Artículo Unico.—Se exonera á los CC. Macario Hidalgo y Florencio Santa María del cargo de diputados al Congreso del Estado, por la renuncia que de dicho cargo han hecho conforme al art. 134 de la Constitución local." Este artículo dice: "Ningun individuo puede desempeñar á la vez dos ó mas cargos de eleccion popular; pero el nombrado puede elegir el que quiera desempeñar, entendiéndose renunciados los demas. Jamas podrán reunirse en un mismo ciudadano dos empleos ó destinos por los que se disfrute sueldo, exceptuando el ramo de instruccion pública." Este segundo cargo de eleccion popular que desempeñaron los quejosos, fué el de electores para presidente y Magistrados 3º y 8º de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.

En el informe del Ejecutivo se leen las reflexiones siguientes sobre la privacion del cargo de los quejosos: "Se ha impuesto este gobierno por el oficio de vd. y copia de la demanda de los CC. Macario Hidalgo y Florencio Santa María, fecha 27 de Febrero, de que estos piden amparo contra el decreto número 187 de veintitres del mismo, que los exonera del cargo de diputados, fundándose en que se han violado en su concepto los arts. 6º, 21, 14, 35, frac. 2º y 126 de la Carta federal, así como el 27 de la particular, sin dejar por eso de llamar *grupo de diputados* al Congreso, así co-

mo *impreso con honores de decreto* á la ley de su exoneracion, lo cual equivale á negar su carácter legal ó constitucional á la legislatura y á su acto mencionado.

Esto bastaria para que el gobierno se excusara de informar á ese Juzgado, pues cuando los quejosos mismos niegan el poder de autoridad al acto reclamado, confiesan por el mismo hecho que ni procede el amparo que solicitan, por tratarse de un acto meramente privado y sin fuerza de obligar, ni saben realmente lo que hacen llevados de la mala pasion que los ciega. O mejor dicho á eso reduciria el gobierno su informe, bastante á los ojos de la ley, si el espíritu de faccion no hubiese intentado revestir en público, á aquel *acto inocente* de un antífaz odioso, como si viviéramos en carnaval político.

En efecto, ¿á qué conduce esa importuna revelacion de haber sido inconstitucionales algunos actos de la legislatura? Si ellos son públicos, aquella es una recriminacion de partido; y si son reservados, dicha revelacion es una deslealtad que justifica tal vez entre otras causas la exoneracion; pero sobre todo, en uno y otro caso, es un desahogo estéril en la cuestion de amparo. ¿Acaso la exoneracion ha sido por sus opiniones *independientes* en la legislatura? No, no señor, sino por el doble cargo electoral que desempeñaban simultáneamente, contra la Constitución del Estado, y aquí comienza el informe oficial sobre los hechos y la impugnacion del razonamiento extravagante de los exonerados.

El decreto citado, promulgado en verdad por este gobierno, dice: que la exoneracion fué á virtud de la renuncia hecha conforme al art. 134 de la Constitución particular, es decir, se fundó en la voluntad misma de los querellantes, mas ó menos espícita, pero indispensablemente juzgada ya por la Constitución

en vista de los hechos que consistían en tener aquellos ciudadanos dos cargos de eleccion popular, de diputados y electores, y haber optado por el segundo que en efecto ejercían, lo cual tenía consigo la renuncia del primero. Ahora, si en este raciocinio de la legislatura hay un error, *transeat*; pero á toda luz no existe violacion de garantía que es el punto contencioso y la esencia de este juicio.

Para aclarar esa exoneracion, apoyada en una supuesta renuncia, fué preciso ocurrir á la legislatura, pidiéndole por medio de v.l., en el término probatorio algunas constancias del expediente respectivo. Dándole al *acto inocente* el alicio de un grave negocio secreto del Estado, esa corporacion aprobó un estenso dictámen, cuya parte resolutive se copia textualmente: "1º Dígasele al Juzgado de Distrito con insercion de este dictámen y como resultado de su oficio fecha ocho del corriente: que no pudiendo esternar los asuntos que en la cámara sean declarados con el carácter de secretos, no pueden ni debe esta barrenar sus acuerdos ni la ley de su reglamento interior.

2º La secretaría cuidará de adjuntarle á esta contestacion lo que esté bajo el dominio público y á lo único que puede contraerse el art. 12 de la ley de amparos, como son un ejemplar del reglamento de esta cámara y otro del decreto número 187." A pesar de todo esto, el art. 39 del reglamento interior del Congreso del Estado se espresa así á ese propósito: "Solo en sesion secreta podrá darse cuenta, y tratarse: 1º de los ocursos y proposiciones que se hagan al Congreso para que declare haber lugar á la formacion de causa á cualquiera de los individuos espresados en la atribucion 6ª del art. 35 de la Constitucion."

A fojas 29 se registra la cita para la sesion extraordinaria en que se acordó destituir á los quejosos, y en ella cons-

ta los nombres de los siete diputados que concurrieron á este acto.

Por ese documento se viene á conocer que se omitió citar á los seis restantes, y que la citacion se hizo con toda la premura el mismo dia en que se firmó el decreto. Dice á la letra. "Secretaría del Honorable Congreso de Querétaro Arteaga.—Circular número 36.—CC. Castro, Castillo, Dueñas, Córdova, Muñoz, Pimentel.

Teniendo que tratar un asunto muy importante, el que suscribe suplica los CC. diputados anotados al margen, tengan la bondad de concurrir á sesion extraordinaria que se abrirá inmediatamente que haya el número competente.

Independencia y Libertad. Querétaro, Febrero 23 de 1873.—*Juan Nepomuceno Leal*, diputado presidente.—*Pedro de Castro*.—*Ángel Dueñas*.—*Luis Pimentel*.—*J. M. Muñoz*.—*Jesus M. Córdova*.—*C. Castillo*.

Aparece asimismo en esos autos la renuncia que del gobierno del Estado hizo D. Julio M. Cervantes, la que pasó á una comision compuesta de los espulsores, que dictaminaron su admision, circunstancia que acaso haya determinado su desgracia, (fojas 35 y 36.) Para que se comprenda esto, es necesario saber: que siendo incompatible la permanencia de Cervantes en el poder, con los artículos 77 y 80 de la Constitucion local, y temiendo que por este motivo se amparase en el pago de contribuciones á los que le niegan la calidad de autoridad competente para exigir las, fundándose en el art. 16 del Pacto Fundamental; para obviar este inconveniente renunció al pronto, mas despues se encontró un medio cómodo y fué el de sustituir á la renuncia licencia ilimitada con sueldo, encargándose entre tanto real ó aparentemente del gobierno el C. Ignacio Castro vice Gobernador, sobre quien no pesa el anatema constitucional.

Tan habituados como hemos estado hasta el año de 1857, á considerar el poder judicial como destinado exclusivamente á aplicar las leyes en los casos sometidos á su decision, sin averiguar si pugnaban ó no con la Constitucion; aún debe causarnos sorpresa el ejercicio de la jurisdiccion de los jueces federales, con facultad para declarar que la ley debe hacerse á un lado, cediéndole su lugar á la Constitucion. Esta novedad viene de la falsa idea, abrigada por muchos, de que el poder legislativo es soberano con facultades para arreglarlo todo, como es en teoría el Parlamento Inglés; y que cuando él ha dictado una disposicion, no hay para qué examinar si el Pacto Fundamental ordena lo contrario. "El sistema americano, dice Grunke, se presenta solo en medio de las instituciones del mundo. Y aunque el fué la consecuencia de la forma perfecta de confederacion, sin embargo, como esta especie de gobierno es la obra del mas grande refinamiento, y el resultado de un alto grado de civilizacion, puede decirse que la organizacion del departamento judicial nacional, es uno de los mas grandes hechos que la ciencia política haya consumado. (Grunke, *nature and tendency of free institutions*. cap. 1, sect. 4.) Importa mucho tener bien presente que la facultad que la Suprema Corte tiene para declarar inconstitucionales las leyes, é inaplicables por esta razon, no puede ejercerla oficiosamente; sino que es menester que haya controversia para que pueda recaer decision judicial, como sucede en el caso presente. Y á fin de destruir los escrúpulos que sobre ingerirse en un acto al parecer legislativo pueda aun tener el Juzgado, se espondrá la teoria de la jurisdiccion federal, tal como la entiende uno de los mas eminentes publicistas modernos. Despues de haber explicado cómo en Grecia se habia soñado encarar al consejo anfictionico, contener á

Tomo III.—Parte II.

cada uno de los miembros de la confederacion dentro de los límites de lo que se habia convenido en llamar la ley común, dice: "En América se han tomado precauciones muy diferentes y eficaces para sostener la Constitucion y reprimir los ataques que puede sufrir, ya de parte de las legislaturas, ya de parte del Congreso. Los tribunales de los Estados y la Suprema Corte particularmente, tienen el derecho, y este es su mas estricto deber, de declarar inconstitucional toda ley que haya sido expedida, segun las formas acostumbradas por la legislatura, negándole todo poder y efecto, si es contraria á las estipulaciones fundamentales de la Union federal, ó á las leyes particulares de cualquier Estado. Así es, que un decreto, un acto solemne emanado del poder legislativo de un Estado, ó del Congreso mismo, un estatuto con todos los caracteres de autenticidad, una ley por ejemplo, á la cual las dos Cámaras del Congreso y el mismo Presidente le hayan dado su asentimiento, puede ser declarada nula é ilegal, ser reputada como si no hiciera parte de las leyes del pais, denunciada como si no fuese obligatoria, y tratada como si no existiese, por razon de ser contraria á la Constitucion; y todo esto se hace por jueces nombrados para ejecutar las leyes y administrar la justicia conforme á sus prescripciones. Estos jueces están obligados á considerar los actos de la legislatura como emanados de agentes elegidos para llevar una mision determinada, y revestidos al efecto de poderes limitados. Si han faltado á su mision, si han traspasado sus poderes, no pueden considerarse sus actos como obligatorios para sus poderdantes, es decir, para el pueblo y la Constitucion. Sus actos no son válidos, sino cuando son conformes á las facultades concedidas por la Constitucion á la legislatura, porque esta debe ser considerada como el simple instru-

mento de aquella. . . . La Constitucion americana niega á la legislatura el derecho de cambiar las leyes fundamentales hasta que una convencion popular haya autorizado la reforma, considera como nula y sin fuerza legal toda innovacion establecida por la legislatura, antes de que la convencion de que acabamos de hablar, le haya conferido el poder necesario para introducirla. . . . No solamente tienen las Cortes de Justicia derecho de examinar si un acto de la legislatura es ó no constitucional en sus distintas cláusulas, sino que tambien pueden tener en cuenta la manera con que ha sido votado, y declararlo nulo, si no se han observado las fórmulas necesarias para su expedicion. Así, en el proceso intentado por el Estado, contra un individuo llamado *Macbrige*, se reconoció que en el caso en que la ley requiera una cierta mayoría para votarla, si el Tribunal encuentra que esa mayoría necesaria no ha dado su asentimiento á la ley, pertenece al Tribunal pronunciar la nulidad del acto votado por la legislatura." (Lord Brougham. De la democracia y de los gobiernos mistos, cap. 30.)

En Europa ha sido siempre general la opinion de que los tribunales no tienen otra mision que la de aplicar la ley, sin apreciar su validez. El Conde de Maistre, decia: "La soberanía no se entiende de la misma manera en Constantinopla que en Londres, pero cuando ha hablado el *Bill*, es sin apelacion como el *Tetfa*; dando á entender que los tribunales no tienen otro medio que aplicar la ley una vez promulgada. Nada tendrian de extraño esas palabras en boca de un autor como este; pero es lo cierto, que solo desde que publicó su obra Tocqueville, se ha comenzado á dar importancia política al poder judicial por los escritores Europeos. Falta, sin embargo, que las Constituciones se las den igualmente.

Entre nosotros, apenas se empieza á comprender la estension que nuestra Constitucion da al poder judicial en el ejercicio de sus facultades, para conservar la supremacía ó inviolabilidad de ella misma. Y como sus principios esenciales sean los mismos de la Constitucion americana, la extrema importancia de esta materia demanda que nos detengamos en ella. El razonamiento del *Federalista* sobre este punto, es claro y satisfactorio, presentando en pocas palabras la razon de haberse preferido el nuevo sistema al antiguo y conocido, segun el que, el juez debia juzgar conforme á las leyes y no sobre ellas: *judex, non de legibus, sed secundum leges judicare debet*. "Raras veces, dice, podriamos esperar que un cuerpo, que habia tenido una parcial intervencion en hacer leyes malas, se hallase muy dispuesto á templarlas y moderarlas en la aplicacion. El mismo espíritu que lo ha movido á hacerlas, lo dirigiria en su interpretacion; y habria todavia menos razon para que hombres que habrian infringido la Constitucion con su carácter de legisladores, estuviesen dispuestos á reparar su falta obrando con el de jueces." (*Federalista* núm. 81.) "Por tanto, dice Story, hay dos objetos de suprema importancia y fundamentales en un gobierno libre, que deben tenerse á la vista, para establecer un departamento judicial nacional. El primero, es la efectiva ejecucion de los poderes del gobierno; y el segundo, la uniformidad en la interpretacion y modo de obrar de esos poderes, y de las leyes expedidas en uso de ellos. El poder de interpretar las leyes, envuelve necesariamente la facultad de afirmar si son conformes ó no á la Constitucion, y si no lo son, de declararlas nulas y sin efecto. Siendo la Constitucion la suprema ley del pais, en un conflicto, ya con las leyes de la Union, ya con las de los Estados, es un deber del poder judicial aplicar la pri

mera, por ser de fuerza superior. Esto es una consecuencia precisa del mismo gobierno republicano, pues de otra manera los actos del legislativo y ejecutivo serian irrevocables y sin contraresto, no obstante las limitaciones contenidas en la Constitucion; cometién dose ademas usurpaciones peligrosas y sin remedio para los ciudadanos. Así quedaria el pueblo al arbitrio de sus gobernantes en la Federacion y en los Estados; y los poderes legislativos tendrian la omnipotencia que pretende el Parlamento Inglés. El sentimiento universal ha decidido en América, que el poder judicial resuelva en último recurso sobre la constitucionalidad de los actos y leyes del gobierno general y de los Estados, en las controversias que sobre ellos se susciten. De donde se sigue que una vez sometidos á la decision judicial, esta es concluyente y definitiva; pues si pudiera desatenderse, los actos del legislativo y ejecutivo serian sin apelacion ó irresistibles (Story. Coment. cap. 38.)

A esta luz debe mirarse nuestro sistema político, ó interpretarse los diversos artículos que diseminados en distintas partes de la Constitucion, forman por medio de su enlace íntimo un todo homogéneo (Arts. 1º, 41, 109 y 126 de la Constitucion.)

Si de estas reflexiones generales pasamos al caso especial que nos ocupa, se comprenderá fácilmente, como puede estenderse la jurisdiccion federal á un acto que reviste la forma de ley y que imita su naturaleza. Tambien, no debe olvidarse, sino tenerse muy presente, que el acto reclamado no tiene algunos de los caracteres propios de la ley, aunque emane del legislativo de Querétaro. Es un precepto fundamental, que el interés general sea siempre objeto de la ley. Esta es una verdad universalmente reconocida. Las disposiciones que conceden beneficios á personas desvalidas y á determinadas clases de ciudada-

nos, mas que á su bien particular consultan al público, y tienen á la vista los principios de equidad y de justicia, que nunca debe olvidar el legislador. Los privilegios, cuando, bajo esta palabra se quiere significar las leyes individuales en odio ó en gracia de personas, de familias ó de castas, condenados ya por los romanos en la famosa ley de las Doce Tablas, están reprobados de consuno por la razon y por la ciencia. La ley debe ser justa en su principio y general en su objeto. Para ser justa, debe ser igual para todos los miembros del cuerpo social. Debe ser general en su objeto, ya sea que proteja; ya sea que castigue; pues de otro modo degeneraria en privilegio. No escluye esta doctrina las leyes que conceden derechos singulares ó beneficios de ley á toda una clase por razones de justicia, como son los otorgados á los menores y á las mugeres, impropriamente llamados privilegios por algunos, sino las exenciones hechas en odio ó en gracia de las personas (Serna Proleg Esghiche Diccinar de legislacion). El decreto de espulsion de los CC. Hidalgo y Santa María, ya hemos visto, que fué espedido en odio de sus personas, ocupándose de ellas exclusivamente.

Es una máxima de jurisprudencia y una garantía individual que la ley no debe tener efecto retroactivo. Es una de las materias mas arduas de la ciencia del derecho la dilucidacion del principio en apariencia sencillo de la no retroactividad de las leyes; siendo tanto mas importante, cuanto que las muchas disposiciones nuevas que se han dado en esta época y las que todavia se preparan, no podrán menos que suscitar á cada paso mil tropiezos que embaracen el triunfo de la justicia. Este axioma no se escribió en el frontispicio de los Códigos romanos y de los nuestros, como una vana frase, sino para servir de preservativo á los individuos de la so-

ciudad contra los caprichos del legislador, esto es, para impedirle que viole nuestra seguridad personal, haciéndonos castigar hoy por un hecho de ayer, que no estando vedado cuando se ejecutó, se debía tener por permitido, ó que atente arbitrariamente contra nuestra propiedad, despojándonos de bienes ó derechos adquiridos. “¿Qué sería, pregunta un jurisconsulto distinguido, de la libertad civil, si pudiese temer el hombre, que aun despues de haber obrado sin infringir las leyes quedaba espuesto al peligro de ser perseguido por sus acciones ó turbado en sus derechos en virtud de leyes posteriores? No confundamos las sentencias con las leyes. Es propio de la naturaleza de las sentencias arreglar lo pasado, porque no pueden recaer si no sobre acciones ó derechos adquiridos y sobre hechos consumados, aplicándoles las leyes existentes.” (Portalís. Exposiciones del primer título del Código Napoleon.) En el caso presente la legislatura ha aplicado la ley á un hecho consumado, espulsando á los CC. Hidalgo y Santa María del seno de la misma corporacion, por haber asistido á la eleccion de Presidente y dos Magistrados de la Suprema Corte de Justicia. También ha anulado el mandato que anteriormente recibieron para representar al público en el Congreso.

Tocante á los derechos adquiridos, dice Escribá, que son acciones ó facultades que se han obtenido antes del acto que se opone para impedir su goce; y agrega, que una vez adquirido un derecho por una persona no se le puede quitar sin su consentimiento. “Los derechos políticos, enseña Laros en su derecho administrativo, deben considerarse tan preciosos como la libertad misma. Cualquier acto de la administracion que los ataque debe ser considerado como el mayor atentado que pueda dar lugar al recurso contencioso ante los tribunales administrativos.... Los derechos

adquiridos resultan de los actos administrativos puramente discrecionales. Estos actos en sí mismo facultativos, producen con frecuencia un derecho que pertenece á aquel en cuyo favor se ha ejercido el acto. *La retractacion de este acto, sin motivo legítimo, encierra la violacion del derecho adquirido, y la discusion es contenciosa.*... Los cargos y empleos públicos producen derechos adquiridos.... El servicio, las funciones, ya sean amovibles ó inamovibles, producen respecto del sueldo y de las pensiones derechos adquiridos” (Laros. Derecho administrativo. Lecc. 4^a y 8^a) En el caso han sido despojados de derechos adquiridos los quejosos, y hemos visto que estos derechos se equiparan á los de propiedad.

Nadie puede ser juzgado en la República por leyes privativas, ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley. En la destitucion de Hidalgo y Santa María han sido estos sentenciados y juzgados por ley privativa y sin instalarse el tribunal competente á que se refiere la Constitucion, (arts. 13 y 14).

La aplicacion de las penas es exclusiva de la autoridad judicial, (art. 21 de la Constitucion). A Hidalgo y Santa María se les aplicó pena por la autoridad legislativa, que les impuso la de destitucion del cargo de diputados, (art. 92 y 93 del Código penal). Aunque la legislatura tenga á veces atribuciones judiciales, en este caso quiso obrar y obró con las legislativas; violando otra garantía constitucional.

Para que se le imponga una pena, el acusado tiene las siguientes garantías:

1^a Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, si lo hubiere.

2^a Que se le tome declaracion preparatoria.

3.^a Que se le caíe con los testigos que depongan en su contra.

4.^a Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para preparar sus descargos.

5.^a Que se le oiga en defensa. (Art. 20 de la Constitución). Los diputados Hidalgo y Santa María han sido condenados á la destitución de su encargo, sin haber tenido ninguna de estas garantías; cuya violación es flagrante, por el acto de la legislatura, que asumiendo la forma de decreto, es realmente una sentencia. Ya nuestra acta de reformas á la antigua Constitución Federal de 1824, reconociendo en el art. 25 los principios espuestos, sobre la jurisdicción de los tribunales de la Nación, imponía á estos el deber de amparar á cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden las leyes fundamentales contra todo ataque, no solo del poder ejecutivo general y de los Estados, sino tambien del poder legislativo; mas en el mismo artículo se advierte que respetando la division de poderes, los tribunales deben limitarse á impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó del acto que lo motivare. En vano se diría que los tribunales no deben conocer de los actos de los otros poderes, ni impedir su ejecución. El derecho de exámen inherente al poder judicial para la aplicación de las leyes, á fin de comparárlas con la Constitución y conocer si la contrarian, no importa erijirse en juez de la utilidad ni de la oportunidad de las medidas tomadas por la legislatura ó por la administración. Todo hecho de estos poderes, que hiere el honor, la libertad, la seguridad, la propiedad ó los derechos adquiridos de cualquier habitante del territorio nacional, es un hecho ilegal; por que derechos tan sagrados, en los términos establecidos por los veintinueve

primeros artículos de la Constitución, han quedado bajo la égida de esta, y á nadie es permitido tocarlas.

Nadie tiene obligación de sufrir tropelías, ni de someterse á actos arbitrarios que conculcan sus derechos. Aunque respecto de la resistencia activa podría decirse, que la resistencia á un acto no puede castigarse, sino en tanto que este acto es legal, y que por lo mismo la resistencia á todo acto ilegal es legítima. Este principio cierto en teoría, nos conduciría en la práctica á constituir á cada individuo en juez de los actos emanados de la autoridad, lo cual sería la subversion de todo orden público. Para que así no sea, es preciso que no el particular, sino la autoridad judicial, examine el acto ilegal, si se ha reclamado ante ella. El peligro de la confusión de los poderes, está visto que no lo hay, pues que la autoridad judicial no reforma la ley ó el acto administrativo, sino que se limita á amparar á la persona que en lugar de hacerse justicia á sí misma, busca el apoyo de la magistratura, que debe ser la salvaguardia de las libertades públicas, (arts. 101 y 102 de la Constitución.)

Si el poder legislativo ó la administración, estiman que el poder judicial encuentra ilegales, leyes ó actos gubernativos que en realidad no lo son, le suscitarán la debida controversia, y el tribunal que la decida terminará de una manera pacífica la cuestion. Así puede cerrarse para siempre el cráter de las revoluciones, y ponerse coto á las demasías del poder.

Por lo expuesto, el Promotor fiscal pide: se conceda el amparo solicitado.

Querétaro, Marzo 22 de 1873.—*Luis Castañeda.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Querétaro, Marzo 27 de 1873.—Vis-
to el presente recurso de amparo promo-
vido por los CC. Macario Hidalgo y
Florencio Santa María, á virtud de re-
putar violadas en sus personas las ga-
rantías que otorgan los arts. 6, 14, 21,
la frac. 2ª del 35 y el 126 de la Consti-
tucion general, con los efectos del decre-
to número 187 expedido por la legislatu-
ra del Estado, en el que se les exone-
ra del cargo de diputados á la propia le-
gislatura; el informe que con total arre-
glo al art. 9º de la ley de la materia se
expidió á la autoridad inmediatamente
ejecutora del decreto reclamado, cuyo
informe se rindió sin justificacion redu-
ciéndose dicha autoridad á rebatir las
razones legales aducidas por los quejo-
sos y á manifestar que la exoneracion
fué decretada en virtud de la renuncia
hecha conforme al art. 104 de la Consti-
tucion local, es decir, de la voluntad
misma de los querellantes *mas ó menos*
explicita, pero juzgada por los hechos al
tener dos cargos de eleccion popular, el
de diputados á la legislatura del Estado
y de electores en el colegio reunido con
objeto de elegir presidente y tercero y
octavo Magistrados de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nacion, optando por
el segundo que en efecto ejercieron, lo
cual en opinion de la autoridad infor-
mante trae la renuncia tácita del se-
gundo concluyendo con apreciar, que
tratándose de la expedicion de un decre-
to al que con arreglo al art. 58 de la
Constitucion del Estado, se le dispensa-
ron todos los trámites y requisitos lega-
les, ninguna observacion podia hacer el
Ejecutivo, siendo por lo mismo toda la
responsabilidad del poder legislativo; el
pedimento fiscal sobre lo principal; las
pruebas rendidas por las partes y sus
respectivos alegatos; la citacion para sen-
tencia con lo mas que verse debió. Con-
siderando: que siendo la naturaleza y ob-

jeto del presente recurso el impedir que
se ataquen ó violen algunas de las ga-
rantías otorgada al hombre por el Pacto
Federativo, ó reparar la violacion cau-
sada, es necesario el investigar si en el
caso presente se ha herido alguna garan-
tía con la promulgacion y efectos del de-
creto reclamado. Que la causal espresa-
da en el mencionado decreto para la ex-
oneracion, no ha sido probada en el
juicio, sino por el contrario que no exis-
tió tal renuncia, y así lo manifiesta en
su informe de fojas 12 la autoridad eje-
cutora al decir que se tuvo como *renun-
cia tácita* la asistencia de los CC. Hidal-
go y Santa María al colegio electoral,
así consta en el escrito de queja fojas 1ª
y así por último aparece de la negativa
de la legislatura del Estado, á remitir
copia de la renuncia que conforme á los
términos del decreto sirvió de fundamen-
to á su expedicion, fojas 27. Que el art.
134 de la Constitucion local, que sirvió
de fundamento al decreto reclamado, di-
ce á la letra: "Ningun individuo puede
desempeñar á la vez dos ó mas cargos
de eleccion popular; *pero el nombrado*
puede elegir el que quiera desempeñar,
entendiéndose renunciados los demas.
Jamás podrán reunirse en un mismo in-
dividuo dos empleos ó destinos por los
que se disfrute sueldo, esceptuando el
ramo de instruccion pública," la renun-
cia de los CC. Hidalgo y Santa María,
con respecto al cargo de representantes
del pueblo solo podria haberse tomado
en consideracion proviniendo de ellos y
siendo espreso que es lo que previene di-
cho artículo, y para poder tener aplica-
cion dicho artículo constitucional debe-
ria tratarse de cargos de eleccion popu-
lar para el Estado, por ser esta la verda-
dera y recta inteligencia del artículo, se-
gun su letra y razon, sin poder tener lu-
gar interpretacion ninguna por no exis-
tir duda ú obscuridad. Que no se aten-
dió en la expedicion del decreto á las
prevenciones del referido art. 134, te-

niéndose como renuncia tácita la presencia de los quejosos en el colegio electoral reunido con objeto de elegir presidente y Magistrados de la Corte de Justicia Federal, declarando la legislatura del Estado que un cargo electoral de un día anulaba la elección del pueblo para representantes á su legislatura. Considerando: que con arreglo á la frac. 12ª y 13ª del art. 93 del Código penal, la destitución ó inhabilitación para obtener determinados empleos, cargos ó honores se tiene como pena, y siendo estos los efectos del decreto número 187, es claro que se impuso por él á los exonerados una pena. Que siendo una garantía concedida en el art. 14 de la Constitución general al ciudadano el no ser juzgado ni sentenciado sino por una ley dada con anterioridad al hecho y exactamente aplicable á él, por el Tribunal que previamente haya establecido la ley; se ha infringido dicha garantía al no haber tenido, como se ha demostrado, su mas exacta aplicación al hecho el art. 131 de la Constitución local; ni la pena haber sido impuesta, caso de proceder, por la autoridad previamente establecida por los arts. 108 y 109 de la misma Constitución. Considerando: que consta de la circular de fojas 29 remitida por la legislatura, y de la declaración (fojas 24) de Benito Vargas, mozo del gobierno, que el Domingo 23 de Febrero próximo pasado, se citó á sesión extraordinaria á los ciudadanos diputados que forman dicho cuerpo, menos á los quejosos; y que en dicha sesión segun aparece de la fecha del decreto (fojas 30) y de la comunicación de la legislatura (fojas 27) se exoneró á los diputados Hidalgo y Santa María, todo lo cual constituye una palmaria violación del art. 20 de la Constitución general en todas sus fracciones y del 27 de la misma Carta al aplicárseles una pena por otra autoridad que no es ciertamente la judicial. Que por tener el carácter de diputados los quejo-

sos, no se debe ni puede dejar de tenerlos como individuos, y por lo tanto en pleno goce de los derechos y garantías otorgadas por el Pacto fundamental de la República á todo ciudadano de la misma. Atendiendo, por último, á que con los efectos del tantas veces mencionado decreto se ataque y destruya por su base el sistema representativo popular (art. 109 de la Constitución) y la libertad parlamentaria; y á que una vez electos los diputados, no pueden dejar de serlo sino en el modo y términos que prevenga la respectiva Constitución. Por las razones y fundamentos legales espuestos, de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal y con arreglo á los arts. 101 y 102 de la Constitución general y de la ley de 20 de Enero de 1869; definitivamente fallando, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. diputados Macario Hidalgo y Florencio Santa María, contra los efectos del decreto número 187, expedido por la legislatura del Estado en 23 de Febrero próximo pasado, que los exoneró del cargo de diputados á la propia legislatura. Previa notificación y sacadas las copias respectivas, elévense estos autos para los efectos legales á la Suprema Corte de Justicia. Lo decretó y firmó el C. juez de Distrito en el Estado, Lic. Víctor de la Peña. Doy fé.—*V. de la Peña.*—*Francisco Ruiz*, secretario.

Es copia. Querétaro, Abril 1º de 1873.—*Francisco Ruiz*, secretario.

EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 18 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por D. Macario Hidalgo y D. Florencio Santa María, diputados á la legislatura, contra el decreto de la misma, publicado el

24 de Febrero de este año, que exonera á los quejosos del cargo de diputados, por la renuncia que se supone hicieron de ese cargo, por haber sido electores para proceder á la eleccion de presidente y tercero y octavo magistrados de esta Corte Suprema de Justicia; y considerando: que la exoneracion indicada importa propiamente una pena, que en caso de que fuese merecida, debiera ser impuesta con arreglo á las leyes y en la forma establecida por ellas, lo que no se ha verificado en el caso; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la misma Constitucion, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio, el 27 del mes próximo pasado, por el juez de Distrito de Querétaro, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. diputados Macario Hidalgo y Florencio Santa María, contra los efectos del decreto núm. 187, espedido por la legislatura del Estado el 23 de Febrero último, que los exoneró del cargo de diputados á la propia legislatura.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 22 de Abril de 1873.—*Licenciado Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el juez 2º de Distrito de México, por José Aniceto, contra la Comandancia militar del Distrito, que lo destinó al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el C. José Aniceto, contra la determinacion de la Comandancia militar del Distrito, que lo destinó al servicio de las armas contra su voluntad, supuesto el estado del juicio, que es el de alegar, y haciéndolo en la forma prescrita por la ley, dice: Que la justificacion de vd. se ha de servir declarar en definitiva, que la Justicia de la Union ampara y protege al expresado C. José Aniceto, contra el acto reclamado, porque con él se han violado en su persona las garantías que otorga el art. 5º de la Constitucion, probado como lo está satisfactoriamente que tal acto se ejecutó estando vigente el decreto de 17 de Mayo del año próximo pasado, que exceptuó del servicio militar á los CC. que tienen las circunstancias que ha demostrado concurren en su persona el repetido José Aniceto, por consiguiente, el que suscribe pide al C. juez como tiene ya espuesto, por ser conforme á justicia.

México, Marzo 11 de 1873.—*Moctezuma.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

México, Marzo 22 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por José Aniceto, á virtud de reputar violada en su persona con su consignacion al servicio militar, la garantía individual que otorga el art. 5º de la Constitucion; visto el informe de la Comandancia militar; lo pedido por el C. Promotor, la informacion testimonial rendida por el quejoso y demas que verse